

para el cobro de contribuciones que adeudan los bienes de concursados, y otros que se hallan bajo la accion de los Tribunales, el Tribunal pleno se ha servido dictar el acuerdo siguiente:—Puerto-Rico primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.—Como parece al Sr. Fiscal.—Rubricado de los Sres. Regente interino, Lopez Bustamante, Fiscal Vida, Presidente de Sala, Sanchez de Fuentes, Magistrados, Primo de Rivera, Peray, Aguilar.—Ricardo de Mendoza.—Y el dictamen del Sr. Fiscal, es como sigue:—Excmo. Sr.—El Fiscal se ha enterado de las dos comunicaciones que preceden del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla y de las copias que acompaña, relativas unas y otras á los obstáculos que suele encontrar la Administracion ó la Hacienda pública en algunos juzgados de primera instancia cuando se trata del cobro de los impuestos y contribuciones respecto á bienes que se hallan bajo la accion de los Tribunales; creyendo el Fiscal atendible lo que dicha autoridad superior manifiesta acerca de este asunto.—En varias leyes de la Novísima Recopilacion, y mas terminantemente en la sétima, título diez, libro cuarto del mismo Código, se previene que los Intendentes, por lo respectivo al ejercicio de la jurisdiccion contenciosa en las dependencias de rentas, deberán conocer privativamente y con inhibicion de los Tribunales ú otras autoridades de todas las causas en que tuviere algun interés la Real Hacienda, así en lo tocante á cualesquiera ramos de las propias rentas ó productos generales ó particulares del Erario, como respecto á su cobranza, y en todas las incidencias anexas y conexas de esa clase de negocios; y en el artículo octavo de la ley de veinte de Febrero de mil ochocientos cincuenta, dictada para la Península, pero hecha extensiva, en cuanto á ese y otros artículos, á las provincias de Ultramar por Real Decreto de dos de Junio de mil ochocientos cincuenta y uno, se dispone que "los procedimientos para la cobranza de créditos definitivamente liquidados, á favor de la Hacienda, serán puramente administrativos, sin que puedan hacerse estos asuntos contenciosos mientras no se realice el pago ó consignacion de lo liquidado en las Cajas del Tesoro público.—Conforme á esos soberanos preceptos, la jurisdiccion de Hacienda puede ejercerse en dos distintas vias; la puramente administrativa, ó la contenciosa, segun verse la cuestion sobre créditos liquidados y no pagados, ó sobre los demas casos ó negocios que se indican en aquellas disposiciones. Esta jurisdiccion contenciosa, ó mejor dicho, los asuntos contenciosos en que tenga interés la Hacienda, podrán ser *contencioso-judiciales*, y hoy se conocerá de ellos por los Tribunales ordinarios con arreglo á lo prevenido recientemente sobre supresion del Juzgado de Hacienda y sobre refundicion de fueros especiales en el ordinario, ó podrán ser tambien en ciertos casos *contencioso-administrativos*, y entonces conocerán de ellos en primera instancia las Audiencias y en segunda el Tribunal Supremo de Justicia, así como antes conocian los Consejos de Administracion y el Consejo de Estado.—Que solo de ambos contraernos, que solo se trata aquí de la jurisdiccion ó del procedimiento puramente administrativo demás está decirlo; por que se trata del pago de las contribuciones, y nó puede haber negocio ninguno ni crédito liquidado de la Hacienda que tanto exija y haya esijido siempre ese procedimiento como el cobro de los impuestos, atendidas las múltiples y urgentes obligaciones del Estado que con ellas principalmente se satisfacen; y así, á la Administracion económica corresponderá esclusivamente entender de su cobranza, dirigiendo al efecto su accion, y sus apremios, si fueren necesarios, á donde quiera y como quiera que se encuentren los bienes del deudor responsable, ó que se hallen afectos al pago de dichas contribuciones.—Y esto, lo mismo es aplicable á las contribuciones del Estado que á los impuestos municipales, segun se declara en Real orden de veinte y nueve de Febrero de mil ochocientos sesenta; y lo mismo tiene que suceder respecto á bienes libres de la accion de la justicia, como respecto á bienes que estén bajo la jurisdiccion de los tribunales por cualquiera causa que sea, porque la ley ni hace ni podia hacer diferencias. En estos casos y en rigorosos términos de derecho los jueces tan luego como fueren interpelados por la autoridad económico-administrativa, dándose por inhibidos de entender del cobro de las contribuciones ó impuestos que se reclamen, deben dejar á disposicion de la expresada au-

toridad todos los bienes responsables al pago, ó la parte de ellos que fuese mejor y suficiente para el solo fin de que la Hacienda efectúe el cobro ó descubierto devolviéndolo á la justicia el sobrante que pudiere resultar; pero sin ninguna clase de consideracion por dichos tribunales, ni porque los bienes esten proindivisos ó concursados, ni por que esté coartada la libre administracion de los mismos bienes por sus dueños, ni por que las cuotas que se reclamen sean del año corriente ó de uno ó de varios años atrasados, ni, en fin, por otro motivo de ninguna especie. Los tribunales en semejantes casos y para los efectos indicados no tienen ni pueden tener nada que ver con los bienes que se encuentren sometidos á su jurisdiccion, ó conocimiento; siendo por otra parte indudable que el Fisco ha tenido siempre el derecho de hipoteca tácita sobre cualesquiera bienes sujetos al pago de los impuestos, con preferencia á todo género de acreedores por privilegiados que sean; y estando ya reconocido y sancionado ese derecho en el Fuero Real y en las Partidas [ley sexta, título veinte, libro tercero, Fuero Real; y ley veinte y cinco, título trece, Partida quinta].—Hemos dicho que en términos rigorosos los tribunales deben en esas ocasiones inhibirse y dejar los bienes á disposicion de la autoridad administrativa ó económica. Pero á veces sucede que, ya por consistir los bienes en metálico ó haber dinero en depósito de sus rentas ó productos, ya por ser facil la venta de aquellos ó de la parte necesaria, la Administracion se limita á pedir á los jueces que desde luego se la pague lo que se la adeuda; y entonces, cuando eso sea facil y de breve ejecucion, á la verdad que á todos interesa que así se haga aunque no sea mas que en ahorro de las mayores dilaciones y gastos y de los inconvenientes que tiene que producir eso de que los bienes vayan y vengan, para venderse, del poder de la justicia á manos de la Administracion &." &"; sin que entonces pueda decirse que los tribunales se entrometan en lo que no les corresponde, sino mas bien que obran por delegacion y en auxilio de la autoridad administrativa.—Por no haberse fijado en las disposiciones y los principios de que venimos de hacer mérito, y que son los que generalmente se han practicado en esta Provincia; por no hacer la debida distincion entre lo que es de la esfera meramente administrativa ó económico-administrativa y lo que lo es de la competencia judicial, es sin duda por lo que algunos jueces, y en particular los de Ponce y Arecibo, que son á los que ahora se refieren el Sr. Gobernador Superior y los alcaldes de Juana-Diaz y Morovis en las comunicaciones que preceden, han ofrecido los obstáculos que se espresan para que la Hacienda ó los fondos municipales realicen lo que se les estaba adeudando, por contribuciones ó impuestos de que debian responder ciertos bienes de testamentarias ó concursos que radicaban en sus juzgados.—En lugar de decretar el pago inmediatamente si habia fondos ó bienes de facil realizacion, ó de lo contrario dejar estos á disposicion de la autoridad administrativa para que ella los vendiese y se cobrase, se han reducido á contestar que los bienes ó finca se habian rematado á plazos y aun no habiendo vendido ninguno ni el comprador se prestaba á adelantarlos, que los bienes se hallaban proindiviso ó concursados, que estaban pendientes de sentencia de graduacion, y otras contestaciones parecidas; como si nada de esto pudiera importar ni impedir á la accion administrativa el ejercicio de su privilegiado derecho.—No aparece que en esos casos se haya requerido formalmente de inhibicion á los jueces, así como tampoco puede decirse que en absoluto ellos se negaran á las pretensiones de la Administracion; pero los jueces, aun sin requerimiento, y en todo negocio en que vean que tiene interés, ó puede experimentar algun daño el Tesoro público deben, conforme á lo prevenido en Reales órdenes de veinte y cinco de Marzo de mil ochocientos cuarenta y cuatro y diez de Julio de mil ochocientos cincuenta dictada para las Provincias de Ultramar, dar conocimiento de ello á la Intendencia con el oportuno testimonio, para los efectos consiguientes, que no pueden ser otros sino los de que la Hacienda, y ella sola, conozca y determine, y mas tratándose de materia puramente administrativa, lo que estime mas conveniente á sus intereses.—En virtud de todo lo espuesto, y á fin de que en lo sucesivo se eviten al Tesoro público y á los fondos municipales los obstáculos y los perjuicios á que alude el Señor Gobernador

Superior Civil, el Fiscal somete á la consideracion de V. E. las siguientes reglas:—1.ª En todo negocio judicial, bien sea de testamentaria, intestado, concurso, ó de cualquiera otra clase, en que aparezca adeudarse á la Hacienda ó á los fondos ú arbitrios municipales algun crédito definitivamente liquidado y por razon de contribuciones ó impuestos los jueces ó tribunales se abstendrán de conocer ó de hacer tambien objeto del juicio ó procedimiento la cantidad ó crédito referido, poniéndolo con el testimonio ó certificacion oportuna en noticia de la Intendencia ó de la autoridad que corresponda.—2.ª Siempre que la autoridad económica ó administrativa requiera á los jueces ó tribunales para que los bienes que puedan ser objeto de un juicio ó procedimiento, de que ellos conozcan y que á la vez se hallen afectos al pago de créditos definitivamente liquidados y por causa de contribuciones ó impuestos, se entreguen en todo ó en la parte necesaria á las mismas autoridades á fin de ejecutarlos y cobrarse los créditos referidos, los jueces ó Tribunales deberán poner dichos bienes ó la parte necesaria á disposicion de aquellas autoridades con el objeto espresado, si en el *perentorio término de diez dias no se acreditare en los autos por quien corresponda* y con la oportuna carta de pago haberse satisfecho el importe de la cuota ó cuotas que se reclamen.—3.ª Cuando dichas autoridades se limitaren á solicitar que se disponga lo conducente á que se abone el importe de los descubiertos que resulten, y si el juez ó tribunal consideran que bien por prestarse desde luego al pago los interesados, por consistir los bienes ó sus productos en metálico, ó por ser estos de facil venta y pronta realizacion, *se podrá satisfacer el importe de las cuotas reclamadas dentro del preciso término de treinta dias*, el juez ó tribunal ordenará que así se haga, y se proce la á lo que fuere consiguiente. Si consideran que nó puedan realizarse los bienes ni hacerse el pago ó consignacion dentro de dichos treinta dias, pondrán los bienes á disposicion de aquella de las autoridades referidas que compete con el objeto mencionado en la regla segunda.—4.ª Las diligencias que se practiquen en virtud de lo que en estas reglas se prescribe formarán ramo separado; no impedirán para nada el curso del juicio ó negocio principal de que dimanen; serán de carácter puramente gubernativo judicial, y en ellas no se admitirán escritos, ni se dará audiencia sino al Ministerio fiscal en caso necesario.—5.ª Cualquiera contestacion que dieren los interesados particulares á las notificaciones que fuese preciso hacerles, ó cualquiera manifestacion pertinente que se les ofreciese, se hará constar por diligencia. Toda reclamacion que intentasen los mismos interesados respecto al pago de la contribucion ó impuesto de que se trate, ó venta de los bienes con que haya de satisfacerse, será del exclusivo conocimiento de la autoridad económica ó administrativa.—Como se vé, estas reglas en nada alteran ó modifican las disposiciones aquí vigentes, sino todo lo contrario; y si merecen la aceptacion de V. E., el infrascripto es de parecer de que desde luego se prevenga su observancia, particularmente á los alcaldes mayores de Ponce y Arecibo, y como medida general á todos los demas alcaldes mayores y jueces de paz de este territorio, públicándose y circulándose á los mismos por medio de la gaceta; y remitiéndose copia certificada del acuerdo de V. E. al Sr. Gobernador Superior Civil, como contestacion á sus dos comunicaciones de fecha... de Octubre ultimo.—V. E. resolverá lo que mejor estime.
Puerto-Rico 20 de Noviembre de 1869.—Vida.
Lo que comunico á V. S. S. para su observancia en cumplimiento de lo acordado.
Dios guarde á V. S. S. muchos años. Puerto-Rico 10 de Diciembre de 1869.—Ricardo de Mendoza.
Sres. Alcaldes mayores y Jueces de Paz de este territorio. 2

1.ª La habilitacion del papel sellado necesario para el consumo, interin llegen las referidas especies y
2.ª Declarar válidas en el próximo año de 1870, todas las demás clases, como sellos judiciales de franqueo para la correspondencia pública, para cédula de esclavos, papel de multas, de reintegros, documentos de giro, sellos de policia y de títulos, en razon á que las tres primeras clases que tienen época de validez, ocupan un diámetro tan reducido que no seria posible estampar en ellas inscripcion alguna de habilitacion mientras que las cinco clases subsiguientes no tienen época fija de duracion.
Lo que se publica para conocimiento general.
Puerto-Rico Diciembre de 1869.—El Administrador Central, Manuel Rodriguez. 3

INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Próxima á abrirse al servicio público, la línea telegráfica de esta Capital á la Villa de Arecibo, ha dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil se publique la Instruccion para el servicio, régimen y contabilidad de la correspondencia telegráfica oficial y privada de esta Isla, aprobada con fecha 15 de Noviembre último, á fin de que las Autoridades y el público tengan un perfecto conocimiento del modo y manera como puedan utilizar este veloz medio de comunicacion.

INSTRUCCION
para el servicio, régimen y contabilidad de la correspondencia telegráfica oficial y privada de la Isla de Puerto-Rico.

SERVICIO DE LA CORRESPONDENCIA.
Artículo 1.º—El servicio de las líneas telegráficas, tanto respecto al orden de trasmision como á los precios y requisitos de la correspondencia privada, se sujetará á las disposiciones de la presente instruccion.
Art. 2.º—El Gobernador Superior Civil podrá suspender, cuando lo creyese conveniente, el servicio de la telegrafia privada de la Isla por el tiempo que juzgue oportuno, bien sea en todas, bien en algunas líneas y ya absoluta ó parcialmente en cuanto á las diversas clases de correspondencia.
Art. 3.º—El Gobierno no acepta otra responsabilidad para el servicio de la correspondencia telegráfica privada que la que se refiere á la trasmision, recepcion y envío á domicilio de los telegramas, adoptando las disposiciones necesarias en cada caso para la regularidad del servicio; pero no responde de la identidad de la persona que los consigna ni de los perjuicios que pudieran resultar del retraso, mala interpretacion de los textos ó pérdida de los despachos.
Art. 4.º La correspondencia telegráfica que da expedida para cuantas personas la soliciten, reservándose el Gobierno la facultad de hacer identificar la persona que pida la trasmision de algun despacho.
Art. 5.º—Los despachos privados habrán de estar escritos precisamente en español, con tinta, en caracteres inteligibles y en un lenguaje que excluya toda duda respecto á su sentido. Deberán tener fecha y llevar la firma del que lo expide, así como tambien las señas, bien especificadas de su destino. Contendrán el nombre y apellido del destinatario y punto de su residencia, expresando la calle y número. En el caso de no poderse llevar los últimos requisitos quedará exenta de toda responsabilidad la Administracion telegráfica si el despacho no llegare á su destino.
Art. 6.º—No se admitirá el uso de signos ni claves de ningun género excepto los guarismos que se empleen en la fecha señas y cualquier cantidad que haya de expresarse. Las marcas de las mercancías, ordinariamente designadas por cifras se admitirán por excepcion contándose cada una por una palabra. Los despachos de oficio podrán escribirse en cifras siempre que se consideren convenientes.
Art. 7.º—Las oficinas de telégrafos en los puntos de expedicion y recepcion, tienen el derecho de negarse á expedir ó á entregar los despachos cuyo texto les parezca contrario á las buenas costumbres ó á la seguridad pública ó que bajo cualquier otro concepto ofrezcan algun peligro. De estas decisiones se admite reclamacion ante el Director de Administracion. Negado el pase en la oficina de expedicion, se hará saber esta negativa al que presentó el despacho, sin devolvérsele; negado en la oficina de recepcion, se avisará por el telegrafo á la que lo expidió. Los originales de las comunicaciones que, hayan quedado sin curso serán remitidos por el encargado de la estacion á la Inspeccion del ramo por conducto de su respectivo Gefe de línea para que aquella dé cuenta á la Direccion con copia autorizada de los despachos que se hallen en este caso.
Art. 8.º—Son despachos oficiales y tienen preferencia para su trasmision respecto á los pri-

ADMINISTRACION CENTRAL
DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

No habiéndose recibido de la Península hasta esta fecha, las especies timbradas para su circulacion y expendio en esta Isla en todo el año de 1870; el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil en su acuerdo fecha 1.º del actual se ha servido disponer: